

9.1. ESPAÑA: LA ÚLTIMA GRAN HUELGA DE MINEROS

Rubén Vega García

De todos los recortes sociales impuestos en los últimos años, sin duda el que ha dado lugar a una respuesta más contundente en las formas y uno de los que han encontrado mayor repercusión y apoyo social ha sido el protagonizado por los mineros. Paradójicamente, se trata en este caso de un problema que afectaba a un colectivo relativamente reducido y cuya suerte apenas tenía consecuencias más allá de su entorno inmediato. Fuera de las comarcas mineras, el fin de la extracción de carbón había de ser forzosamente un motivo muy marginal de preocupación en un contexto en que problemas mucho más acuciantes sembraban la angustia en extensos sectores de la sociedad. Seguramente dos causas en las que se funden su presente y su pasado pueden ser apuntadas para explicar la atención prestada y la corriente de simpatía, e incluso de solidaridad activa, de la que se beneficiaron los mineros a lo largo de más de dos meses de huelga en 2012. La primera sería la propia determinación de luchar, la energía con la que defienden sus reivindicaciones, lo que les permite convertirse en referente y catalizar no pocas energías y descontentos que no encuentran cauce para expresarse por sí solos. La segunda guardaría relación con la pervivencia de una imagen de los mineros como arquetipos de obreros forjados en pasadas luchas cuyos ecos todavía resuenan. Las frecuentes descalificaciones de que son objeto desde medios hostiles por el carácter supuestamente anacrónico de sus protestas hacen referencia justamente a uno de sus atractivos a los ojos de otros sectores de opinión.

Crónica del conflicto

El desencadenante inmediato parte de la decisión del Gobierno de reducir en dos tercios las ayudas previstas a la minería del carbón y recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012. El anuncio, realizado en mayo, comportaba un recorte drástico (de 703 a 253 millones de euros) que afectaba tanto a las subvenciones directas a las empresas como a las partidas de

fondos de reactivación económica de las comarcas mineras, las inversiones en infraestructuras, las ayudas a la creación de empleo y las becas para estudiantes. Se incumplía de este modo tanto la ley de Presupuestos como los compromisos establecidos en el Plan de la Minería del Carbón firmado en 2005 y cuyo horizonte de finalización de las ayudas se fijaba en 2018, mediante un progresivo descenso iniciado en 2010. Este plan era, de hecho, un acuerdo para la lenta extinción de la minería, puesto que a partir de la fecha límite de 2018 únicamente las minas que resultaran rentables permanecerían abiertas, lo cual, en el caso del carbón español, es en la práctica sinónimo de cierre, al menos para toda la minería subterránea, sobreviviendo únicamente explotaciones a cielo abierto, con mucha más baja capacidad de generación de empleo y mayor impacto medioambiental. La decisión del Gobierno afectaba, por tanto, no a la suerte final del sector sino al plazo establecido. Y, en cuanto a las formas, representaba una ruptura unilateral del plan vigente, en su día negociado por empresarios, sindicatos y Gobierno.

El 17 de mayo quedan rotas las negociaciones con la patronal (Carbunión) y los sindicatos mineros (UGT y CC.OO.), de modo que estos anuncian movilizaciones y convocan asambleas en los pozos. Desde este instante, aparece claro que el planteamiento del Ejecutivo y su inflexibilidad en la mesa de negociación precipitarán el cierre del sector y que esta vez tampoco habrá medidas compensadoras del impacto territorial o de reactivación económica. Inicialmente, los sindicatos convocan cuatro jornadas de huelga en todas las explotaciones para el 23, 24, 30 y 31 de mayo, acompañados de manifestaciones en las comunidades afectadas y de una concentración en Madrid. Desde la base se producen iniciativas que se anticipan a la convocatoria: el día 21 ocho mineros del pozo Alinos, en Santa Cruz del Sil (El Bierzo), inician un encierro. En Asturias, el primer día de huelga es acompañado de barricadas y cortes de tráfico en las principales vías de comunicación. El viejo sindicalista José Ángel Fernández Villa (69 años, 33 de ellos como secretario general del SOMA-UGT), escenifica la determinación de los sindicatos a sostener una enérgica movilización prendiendo fuego ante las cámaras de los medios de comunicación a una barricada de neumáticos que bloquea la autopista que conduce al aeropuerto de Asturias, mientras que las

comunicaciones con la Meseta son cortadas por un piquete de quinientas personas. Lo mismo sucede en la vertiente leonesa de la cordillera, donde también son cortadas las vías con Asturias y con Galicia, y en Alcañiz (Teruel). En los pozos, el seguimiento de los paros alcanza el 100%. Al día siguiente, la manifestación en Oviedo cuenta con la presencia de los alcaldes de concejos mineros y poco después una reunión sostenida en Mieres por regidores de ayuntamientos de Asturias, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha suscribe un comunicado que respalda las movilizaciones de los sindicatos y exige al Gobierno un cambio de posición. La unanimidad reina a pesar de que entre ellos se cuentan alcaldes pertenecientes al partido del Gobierno (PP) junto a los de la oposición (PSOE e IU).

Los mineros asturianos de la empresa pública HUNOSA anticipan de forma espontánea la convocatoria del 30 de mayo, paralizando la actividad y retomando las barricadas desde el día anterior. Al final del mes la huelga se convierte en indefinida y en dos pozos asturianos (Candín, en la cuenca del Nalón, y Santiago, en la del Caudal) se inician sendos encierros de mineros. Unos diez mil manifestantes trasladan la protesta a Madrid, en tanto que el Gobierno mantiene su inflexibilidad. La policía, que hasta entonces había permanecido pasiva, realiza las primeras cargas, tanto contra manifestantes en la capital como contra los piquetes que realizan cortes de tráfico.

El lunes 4 de junio, el transporte -tanto de mercancías como de pasajeros- por carretera inicia una huelga indefinida en Asturias ante el estancamiento de las negociaciones del convenio colectivo y el fracaso de la mediación del Gobierno regional, sumando un segundo conflicto laboral de gran repercusión. De inmediato, tres unidades de reserva de la Guardia Civil son trasladadas a Asturias. Al mismo tiempo, la incorporación de piquetes de transportistas supone multiplicar los puntos donde se producen cortes de tráfico. Ambas huelgas carecen de conexión en cuanto a sus motivos, puesto que la del transporte responde estrictamente a la negociación colectiva y no tiene más dimensión política que la que le otorga la repercusión económica y mediática, junto a la alteración de la normalidad en las carreteras. Una delegación de huelguistas del transporte visitará, no obstante, el pozo Candín y hará entrega de una aportación en dinero como ayuda a la caja de resistencia de los

encerrados, en cumplimiento de lo acordado por la asamblea de trabajadores. A su vez, un numeroso grupo de mineros se desplaza a Gijón para cortar los accesos al puerto de El Musel, donde se produce una tensa situación con los efectivos policiales que tratan de impedir la acción del piquete.

Entre tanto, el paso estratégico hacia la Meseta focaliza los más duros enfrentamientos. En el entorno del monumento pre-románico de Santa Cristina de Lena, cuyas laderas miran a la autopista A-66 cortada por una barricada, piquetes provistos de armas caseras (cohetes y tubos convertidos en lanzaproyectiles, tirachinas para lanzar rodamientos y tornillos, piedras, escudos artesanales para defenderse) sostienen durante horas enfrentamientos con los policías antidisturbios que emplean profusamente botes de humo y pelotas de goma, pero únicamente logran practicar dos detenciones. La escena se repite en otros lugares de Asturias y León. También en Andorra (Teruel) y en Guardo (Palencia) se producen cortes de tráfico. Tras esta dura jornada, la táctica de los mineros cambia al día siguiente, multiplicando y dispersando los focos, de tal modo que tan sólo en Asturias se producen un total de sesenta cortes de tráfico en diez carreteras distintas y también un corte de vía férrea, pero renunciando esta vez a la defensa de las barricadas por un tiempo prolongado para evitar los choques directos con la policía, que fue mantenida en jaque desde la madrugada hasta bien avanzada la tarde. En León, en cambio, los duros enfrentamientos se saldan con diez detenidos. El endurecimiento de la respuesta policial y la escalada de los mineros ante la inexistencia de perspectivas de negociación hará en adelante más frecuentes los choques. En días subsiguientes, las comunicaciones por carretera y ferrocarril entre Asturias y León serán cortadas desde ambos lados. El jueves 7 de junio, estos cortes duran todo el día y en la localidad leonesa de Ciñera, como sucederá posteriormente en las asturianas de Caborana y Pola de Lena, la policía irrumpe en el casco urbano provocando la extensión de la violencia al conjunto de la población y causando daños contra viviendas y personas. En Aragón, los mineros interrumpen la sesión del Parlamento autonómico y bloquean la salida de los diputados durante horas. Al día siguiente, cortan los accesos a Andorra (Teruel) por tren y carretera, mientras en Asturias los episodios más tensos se viven en las inmediaciones e incluso

dentro del recinto del pozo Santiago (en Caborana), donde se mantiene uno de los encierros, dando pie a comunicados de condena de la intervención policial por parte de diversas fuerzas políticas locales.

La solución del conflicto del transporte en Asturias, al alcanzar las partes un acuerdo que pone fin a la huelga, reduce a partir del día 9 las tensiones, pero los sindicatos calientan motores al mismo tiempo para una huelga general en las comarcas mineras fijada para el 18 de junio. En Palencia, tres mineros emprenden un encierro en la Delegación de la Junta de Castilla y León. El 12 de junio, una manifestación nocturna con lámparas encendidas discurre por las calles leonesas en medio del calor popular. Entre tanto, a lo largo de la tercera semana de huelga, los puntos más calientes se localizan en la provincia de León, con duros enfrentamientos entre mineros y policía en Ciñera y Bemibre, y en Asturias, donde prosiguen las refriegas en Campomanes y se producen también choques en Grado. Las imágenes de la radicalización de las movilizaciones saltan a los medios internacionales, encontrando reflejo en la prensa escrita (*Washington Post*, *Wall Street Journal*, *USA Today*, *Daily Mail*, *The Guardian*, *Ouest France* o el australiano *The Age*) y las cadenas de televisión, en tanto que algunos videos alojados en internet reciben gran número de visitas. Nuevas detenciones vienen acompañadas de las primeras denuncias de maltrato policial, en tanto que se anuncia el envío de refuerzos de las unidades antidisturbios. Los sindicatos reciben apoyos políticos de parte de los presidentes autonómicos de Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP), así como de alcaldes de diverso signo, pero el Gobierno responde reafirmando lo inamovible de su postura en el debate que el ministro de Industria sostiene en el Congreso de los Diputados. En vísperas de la huelga general en las comarcas mineras, en Asturias se suman las asociaciones de comerciantes y aceptan cerrar las cadenas de supermercados y las sucursales bancarias.

El día 18 de junio, el seguimiento de la huelga general es masivo en 63 municipios asturianos (16), leoneses (24), palentinos (7) y aragoneses (16). En las multitudinarias manifestaciones de Langreo, León y Andorra se anuncia una nueva acción: la marcha a pie hasta Madrid de columnas de mineros partiendo desde las cuencas. A su vez, seis mineros aragoneses deciden el día 20 encerrarse en el interior de la mina de Sierra de Arcos, en Ariño, secundando

los encierros que ya se vienen sosteniendo en León y Asturias. En el Suroccidente asturiano, las mujeres asumen un notable protagonismo en la extensión de la huelga, al haber decidido los sindicatos no organizar piquetes ese día. Cuatro mineros emprenden un encierro en el ayuntamiento de Cangas del Narcea coincidiendo con la manifestación que acompaña a la huelga general. También son mujeres quienes se desplazan desde las diversas cuencas a Madrid para protestar en el Senado cuando se somete a votación en la Cámara Alta el recorte a la minería. Un centenar son expulsadas de las tribunas de invitados y varios cientos más se manifiestan en el exterior. La esperanza de que los senadores del partido del Gobierno rompieran la disciplina de voto, tal como alguno había anunciado, para defender el mantenimiento de las ayudas se ve frustrada y tan sólo un senador del PP (el leonés Juan Morano, que será sancionado por ello) vota en contra.

El 25 de junio, los 300 mineros de Encasur, en Puertollano, se convierten en los primeros en abandonar la huelga, si bien envían una representación simbólica de seis compañeros para incorporarse a la Marcha Negra. Aunque también habían protagonizado cortes de carreteras, concentraciones y una manifestación en Toledo, el apoyo ciudadano parece haber sido más débil, en correspondencia con el menor peso de la última mina abierta en la economía local. La ciudad no había tomado parte en la huelga general del día 18 y la asamblea de trabajadores aprobó poner fin al paro indefinido que se prolongaba casi un mes.

A partir del 22 de junio, la atención mediática se concentra en la Marcha Negra. Al cuarto día, la columna asturiana salida de Mieres se junta en La Robla con los leoneses llegados de Laciana y El Bierzo formando un único grupo de 160 trabajadores que encuentra al día siguiente una calurosa acogida en la ciudad de León. En su retaguardia, prosiguen los cortes de tráfico y las barricadas, mientras a su paso por pueblos y ciudades van recibiendo constantes muestras de apoyo. Coincidiendo con el ecuador de la marcha, los sindicatos son recibidos por el ministro de Industria en una reunión breve y sin fruto alguno. Tampoco obtiene resultado la entrevista con el ministro del presidente autonómico asturiano, el socialista Javier Fernández, celebrada a continuación. La patronal (Carbunión), que sigue esperando ser recibida, se pronuncia en

contra de los argumentos del ministro. Los alcaldes mineros celebran una reunión de ACOM (Asociación de las Comarcas Mineras) y emiten un comunicado conjunto reclamando al Gobierno una rectificación. Incluso el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del mismo signo político que el Ejecutivo, pide un cambio de postura. Entre tanto, los choques con la policía se recrudecen en Asturias y León y el número de detenidos va en aumento. A su vez, las Mujeres del Carbón son recibidas por el presidente asturiano y se manifiestan en las calles de Oviedo. Y los encerrados en Santa Cruz del Sil reciben la visita de la cantaora flamenca Rocío Márquez, que canta para ellos a 700 metros de profundidad.

En la noche del jueves 5 al viernes 6 de julio, los enfrentamientos violentos se producen, por primera vez, en el interior de una población grande. Durante cinco horas, Pola de Lena permanece sitiada por los antidisturbios mientras sus calles son escenario de persecuciones y enfrentamientos. Cientos de vecinos se suman a la movilización, mientras otros increpan a las fuerzas policiales o les arrojan objetos desde sus ventanas. Numerosas viviendas resultan dañadas y una niña de 5 años es herida por los cristales que produce un impacto de pelota de goma que entra en su casa. El uso de este material por parte de la policía dentro del casco urbano será duramente criticado por vecinos y sindicatos. También en las inmediaciones del pozo Santiago se producen choques violentos a lo largo de casi todo el día y la sede del PP en Cangas del Narcea es apedreada.

El clima creado en los primeros días de julio lleva a pronunciamientos a favor del diálogo tanto al Gobierno asturiano y a portavoces de distintas fuerzas políticas como al arzobispo de Oviedo, coincidiendo -pese a las distancias obvias- en un tono que combina la comprensión hacia las reivindicaciones de los mineros con la apelación a evitar el uso de la violencia. La prensa conservadora editada en Madrid intensifica sus descalificaciones equiparando los métodos de lucha de los mineros a la guerrilla urbana. Los sindicatos e IU denuncian, por su parte, la dureza de las intervenciones policiales, que juzgan desproporcionada e indiscriminada. A su vez, la vertiente judicial del conflicto se endurece, de modo que si los primeros detenidos habían sido puestos en libertad sin cargos, ahora comienzan a pesar sobre ellos acusaciones de

desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, con peticiones fiscales de prisión preventiva, de modo que pesa sobre ellos un procesamiento pendiente, una sanción económica y el riesgo de encarcelamiento en caso de volver a ser detenidos. Ante los juzgados de Pola de Lena se produce el domingo 8 de julio una concentración de centenares de personas que durante varias horas esperan a la toma de declaraciones y la puesta en libertad de cinco acusados que llevan 48 horas detenidos. Al día siguiente, los enfrentamientos se repetirán en una nueva batalla campal en las calles que se prolonga hasta la madrugada. En Langreo son las mujeres quienes realizan una marcha nocturna y en diversos ayuntamientos se producen encierros simbólicos de alcaldes.

La etapa previa a la llegada a Madrid parece anticipar el recibimiento que la capital otorgará a los mineros. En Villalba, el gaitero José Ángel Hevia recibe a la marcha con los acordes del Asturias Patria Querida y de Santa Bárbara Bendita. También Víctor Manuel actuará para ellos esa noche. Los hosteleros y vecinos de la urbanización Rosa Luxemburgo en Aravaca y una representación de los bomberos de la Comunidad de Madrid expresan su solidaridad y diversos artistas de cine, cantantes y escritores acuden para mostrar su apoyo. Los dos centenares de mineros de las columnas provenientes del Norte (80 asturianos y otros tantos leoneses) y de Aragón (40) se unen para entrar conjuntamente en Madrid en lo que se convierte en un impresionante recibimiento. Con una puesta en escena que se revelará extremadamente eficaz, los sindicatos deciden entrar en la ciudad a medianoche, uniformados con sus cascos y sus lámparas encendidas. Una multitud los ovaciona a ambos lados de las calles en lo que se convierte en una primera manifestación espontánea de apoyo, cargada de emotividad y en la que los eslóganes coreados se mezclaban con el himno de Santa Bárbara Bendita, archi-repetida banda sonora de la huelga. Al día siguiente, una enorme manifestación que se extiende a lo largo de cuatro kilómetros del Paseo de la Castellana congrega en torno a los mineros y los miles de desplazados desde las cuencas para arrojarlos a muchos otros colectivos que combinan el apoyo con la expresión de sus propias causas de descontento. El movimiento de indignados está ampliamente representado, como también enseñantes, trabajadores de la sanidad, funcionarios, estudiantes y muchos otros grupos. Por la tarde, otra

manifestación convocada al margen de los sindicatos pero también en apoyo a los mineros y en protesta por los recortes vuelve a congregarse a miles de personas. Era la tercera manifestación provocada por la llegada de los mineros a Madrid. Como en la precedente, se produjeron choques entre policía y manifestantes que dieron lugar a detenciones. A su vez, en muchas otras ciudades se producen concentraciones de apoyo a la marcha de los mineros que reúnen entre docenas y varios centenares de personas, a menudo sin relación alguna con el carbón. Los medios de comunicación internacionales vuelven a prestar especial atención al conflicto, con imágenes y reportajes en cadenas de televisión (CNN y Al Jazeera realizan incluso conexiones en directo) y prensa escrita (*The Washington Post*, *The Wall Street Journal*, *Financial Times*, *The Guardian*, *Le Monde*, *Le Figaro*, *Corriere della Sera*, *Clarín*, *Bangkok Post*...)

La insistencia de la prensa en resaltar los incidentes violentos (si bien las mismas informaciones evidencian que únicamente dos de los 18 detenidos ese día son mineros y los incidentes han sido protagonizados por lo que las fuentes policiales denominan “grupos antisistema”) y el intento de minimización de la magnitud de la protesta por parte del partido del Gobierno (la policía cifra en 10.000 el número de manifestantes y la presidenta del PP madrileño ironiza al respecto) apenas pueden empañar el éxito de una movilización que ha excedido todas las expectativas de sus convocantes. Los mineros se convierten a su llegada a la capital en catalizadores de múltiples descontentos y en revulsivo para otros que ven en ellos no tanto una coincidencia de intereses -a menudo inexistente o muy tenue- como un referente por su capacidad de respuesta. La ingente manifestación concita múltiples voces contra las políticas de recortes sociales que están siendo aplicadas en detrimento de las condiciones de vida y de trabajo de una gran mayoría de la población. En Madrid, la estela de la presencia de los mineros deja, una vez que han retornado a sus lugares de origen, un reguero de protestas que convierten las calles en escenario constante de manifestaciones. Durante varias semanas no pasa un solo día sin que haya al menos una, protagonizada por las batas blancas del personal sanitario, las camisetas verdes de los

enseñantes, las negras de los empleados públicos, los grupos de Stop Desahucios, bomberos, parados...

La conclusión de la marcha vendrá acompañada del fin del encierro de los siete mineros que han permanecido durante 52 días en el interior del pozo Santa Cruz, en Páramo del Sil, que son relevados por otros cinco compañeros. Lo mismo sucede días después con los asturianos en Candín y Santiago, reemplazados por diez compañeros que descienden a Candín y a Nicolasa.

Coincidiendo con la llegada a Madrid de la Marcha Negra, el Ministerio de Industria convoca a los representantes de la patronal del carbón a una reunión que resulta ser tan estéril como todas las precedentes. Los portavoces de Carbunión no sólo insisten en que la mayoría de las empresas están abocadas al cierre de no variar la postura del Gobierno sino que acusan a éste de haberles convocado con el único fin de ofrecer una falsa apariencia de negociación. El 20 de julio, sindicatos y patronal presentan una propuesta conjunta que parece ofrecer una vía de escape al callejón sin salida en que se ha convertido la huelga, con una postura inamovible por parte del Gobierno: aceptar los recortes impuestos para 2012 e ir compensando gradualmente en años sucesivos la reducción de modo que se mantenga el horizonte de 2018 para el fin de las ayudas sin precipitar los cierres. Pero la respuesta del Ejecutivo cierra cualquier posibilidad de negociación. Tampoco los alcaldes mineros obtienen fruto de su intento de desviar fondos destinados a obras públicas para sostener de ese modo la actividad minera. A este persistente punto muerto se añade la ruptura de la unidad sindical, al hacerse públicas las desavenencias que hasta entonces habían permanecido soterradas aunque patentes.

Tras dos meses de huelga, la unidad se rompe también entre las distintas cuencas mineras. En una asamblea celebrada en Andorra, los aragoneses deciden unilateralmente la vuelta al trabajo el 1 de agosto, en víspera de una nueva reunión con el Ministerio de Industria. El agotamiento de la capacidad de resistencia parece ser la razón que explica esta decisión, que debilita la posición negociadora de los representantes sindicales. Tanto en Asturias como en León se está gestando también el fin de la huelga, si bien la desconvocatoria no se produce en tanto no se celebre la reunión prevista con

el Secretario de Estado de Energía. Las esperanzas de obtener en este encuentro algún avance que permita justificar la vuelta al trabajo se ven frustradas y tanto la patronal como los sindicatos consideran un fracaso este nuevo contacto. Pese a ello, las direcciones sindicales -particularmente CC.OO.- dan muestras de estar decididas a poner fin a la huelga, decisión que se adopta el jueves 2 de agosto, al cabo de 65 días. La salida de los encerrados de los pozos el mismo día 2 y la reincorporación al trabajo al día siguiente se produce entre escenas de emoción y sensaciones de derrota. Las proclamas sindicales acerca de la continuidad de las movilizaciones no pueden enmascarar el hecho de que una huelga indefinida toca a su fin por agotamiento y sin que la otra parte se haya movido un ápice de sus posiciones iniciales. Ni siquiera una mínima concesión que hubiera permitido ofrecer alguna expectativa sobre vías de negociación futuras.

La situación cobra visos de mayor complejidad en las cuencas leonesas, donde las directrices sindicales son desoídas por los trabajadores de Uminsa, la mayor empresa privada del sector, que deciden mantener el encierro en Santa Cruz del Sil y proseguir la huelga en tanto el empresario no garantice la continuidad de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales, puesto que en lo inmediato se anuncia una reducción de salarios. El conflicto y el encierro serán mantenidos en solitario por estos trabajadores hasta el 6 de agosto, completando un total de 77 días consecutivos de encierro en la mina por parte de dos relevos de trabajadores. También en Asturias las Mujeres del Carbón se esfuerzan por mantener activa la llama de la protesta y convocan una marcha a través de las calles de Mieres, entre el lavadero de carbón de El Batán y el monumento a los mineros muertos en accidente laboral.

En los días posteriores a la reanudación del trabajo se producen ya los primeros despidos en empresas de subcontratas. Al mismo tiempo, en las empresas privadas propiedad de Victorino Alonso se agudizan las tensiones a causa de la imposición de rebajas salariales, alteraciones del régimen de turnos y supresión de las vacaciones. Por este motivo, el 9 de agosto deciden volver a la huelga un centenar y medio de mineros de Cerredo y Tormaleo, en el suroccidente asturiano, y otros 400 en la vertiente leonesa, dando inicio, casi sin solución de continuidad, a un nuevo conflicto que se prolonga a lo largo del

mes de agosto Este rebrote no ha sido convocado por los sindicatos sino que nace de la respuesta espontánea de los mineros y cuenta con el refuerzo de mujeres que en Asturias llegan a formar un piquete para impedir la entrada de camiones cargados de carbón importado en la térmica de Soto de la Barca.

En realidad, este aparente epílogo de la huelga abrirá una nueva fase de la conflictividad que se revelará persistente y que, a diferencia de lo sucedido entre mayo y julio, encuentra muy escaso eco en los medios de comunicación. De forma prácticamente ininterrumpida, el sector permanece en tensión a lo largo de 2012 y entrado 2013, si bien sus manifestaciones pasan a ser dispersas y las direcciones sindicales permanecen en un segundo plano que desmiente las proclamas realizadas en el momento de desconvocar la huelga respecto a una reanudación de la misma tras la pausa de agosto. Al mismo tiempo, la generalización de los despidos y las regulaciones de empleo rompe el frente común que, de forma tácita, habían mantenido patronal y sindicatos, al volverse las movilizaciones de los mineros contra los empresarios. Esta situación, que afecta únicamente a la minería privada, deja al margen de los rebotes conflictivos a las cuencas centrales asturianas, explotadas por la pública HUNOSA, pero aboca a situaciones límite a las comarcas asturleoneras a ambos lados de la cordillera.

Las secuelas de la huelga no se circunscriben, por otra parte, a los efectos sociales de su derrota sino que se hacen sentir también en su vertiente judicial, en la que se puede apreciar igualmente un endurecimiento respecto a ocasiones precedentes, en las que rara vez los detenidos acababan ante los tribunales. Esta vez, por el contrario, apenas finalizada la huelga se abre un nuevo frente, al adoptar la fiscalía la postura de solicitar penas de prisión contra los detenidos en las numerosas algaradas a que dieron lugar los cortes de tráfico. El primer acusado será un minero de 48 años para el que se solicita cuatro años de cárcel por atentado contra la autoridad “con agravante de disfraz”. Reforzando esta línea de la fiscalía, cuyo origen aparenta ser de carácter político, el Delegado del Gobierno en Asturias declarará, con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, que el destino de aquellos que han actuado con violencia en las movilizaciones mineras es “la detención, el calabozo, el juez y, en ocasiones, la cárcel”, anunciando la determinación de

ser implacables con lo que califica de guerrillas urbanas. Entre tanto, de forma aislada y sin autoría concreta, se producen nuevos cortes de tráfico y barricadas de neumáticos que no son defendidas por sus autores cuando se presentan las fuerzas policiales ni dan lugar a comunicados de organización alguna. Para el Delegado del Gobierno, se trata, en todo caso, de secuelas de la mala imagen proyectada por la reciente huelga minera

Aunque las movilizaciones no se han dado por concluidas y en septiembre vuelve a ser convocada una manifestación en Oviedo por el futuro del carbón y de las comarcas mineras, la normalidad laboral en los pozos de la minería pública no puede sino mermar el seguimiento de las protestas. En estas circunstancias, apenas alienta esperanza alguna de que se abra cauce para la negociación. Muy al contrario, en los albores de 2013 los anuncios del Gobierno no hacen sino endurecer la situación imponiendo nuevos recortes y advirtiendo de que en lo sucesivo no habrá ya pre-jubilaciones para los trabajadores excedentes ni tampoco garantía de puestos de trabajo alternativos. Varios miles de mineros estarían, de este modo, abocados a reinsertarse en el mercado laboral en los años venideros o a engrosar las filas de los desempleados, en un momento en que las cifras del paro alcanzan los seis millones y superan la tasa del 25%. Igualmente, el plan sectorial para el período 2013-2018 es aprobado por el Gobierno sin acuerdo -ni apenas negociación- con los interlocutores sociales, un hecho sin precedentes en la larga secuencia de dos décadas de reconversiones de la minería española del carbón.

El Gobierno no sólo se mantiene en su postura inflexible respecto al recorte de las ayudas y la negativa a abrir la vía a las pre-jubilaciones para los mineros que pierdan su trabajo sino que añade nuevos motivos de agravio al reducir aún más las asignaciones al sector para 2013 y rebajar sin previo aviso las percepciones de los pre-jubilados de reestructuraciones anteriores, incumpliendo de este modo los compromisos firmados en ocasiones precedentes. Al mismo tiempo, la retención de la transferencia de las ya muy mermadas ayudas a las empresas en los casos en que éstas no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social aboca al cierre incluso a explotaciones que parecían llamadas a sobrevivir al menos

durante algunos años y en las que se habían realizado importantes inversiones. Tanto empresarios como alcaldes aducirán que los impagos de las empresas son consecuencia del bloqueo de las subvenciones y, por tanto, ha sido la Administración la causante de un círculo vicioso que precipita los cierres.

Más aún, las condiciones de las que disfrutaban los pre-jubilados de acuerdos de reconversión anteriores son alteradas sin previo aviso, provocando reducciones en sus ingresos que rondan los 500 euros mensuales para muchos de ellos. Se trata, en este caso, no sólo de un incumplimiento de lo pactado en su día por anteriores gobiernos sino también de una posibilidad que había sido expresamente descartada por portavoces gubernamentales durante el transcurso de la huelga. El total de afectados (unos 8.000) supera al de mineros en activo. A menudo descansa sobre ellos una economía familiar de la que dependen hijos y no pocas veces nietos, dado el altísimo índice de desempleo juvenil existente en las cuencas, de modo que esta medida viene a agravar la ya crítica situación social que viven las comarcas mineras.

Entre tanto, en el suroccidente asturiano y en El Bierzo, las empresas de Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) llevan a cabo una serie de EREs que reducen drásticamente el empleo. En la parte asturiana se pasa en pocos meses de un millar a apenas 300 trabajadores en activo. Dada la imagen que rodea a este empresario, que es a su vez el mayor receptor de subvenciones, distintos episodios poco claros sirven de argumento al Gobierno para congelar los pagos pendientes a sus empresas, al tiempo que la situación de sus trabajadores se agrava hasta verse abocados de nuevo a la huelga en defensa de sus empleos. En Santa Cruz del Sil se inicia el 18 de marzo de 2013 un nuevo encierro en el pozo Alinos para protestar contra los despidos. Las movilizaciones están siendo desarrolladas ahora con escasa presencia en las carreteras y procurando no alterar la normalidad ciudadana, lo cual a su vez les resta gran parte de su repercusión mediática.

La situación raya en lo desesperado en la minería privada, que tradicionalmente sufre peores condiciones de trabajo y de seguridad, percibe salarios menores (que pueden ser incluso mileuristas), se enfrenta con cierta frecuencia a despidos y, en buena parte de las minas en Asturias y León, pertenece además a un empresario que se distingue por sus métodos poco

dialogantes. Victorino Alonso, llegado al sector tardíamente, al calor de las subvenciones y otras oportunidades de negocio no siempre transparentes, se ha convertido, a base de adquirir minas en quiebra y mantenerlas abiertas, en el principal empresario del sector del carbón. Propenso a utilizar a los trabajadores como arma de presión política sobre la Administración y permanentemente bajo sospecha de prácticas fraudulentas, encabeza la patronal Carbunión.

Coincidiendo con la redacción de estas líneas, el 19 de marzo de 2013, tres noticias aparecidas ese día en la prensa asturiana dan cuenta de las secuelas de la huelga: un minero es condenado por su participación en las movilizaciones de junio del año anterior y habrá de pagar 3.200 € para satisfacer la multa y eludir la cárcel. Los trabajadores de subcontratas de HUNOSA realizan una protesta en Sotrondio. Y los pre-jubilados de reconversiones anteriores inician una acampada contra la rebaja de sus pensiones y para exigir el cumplimiento de lo pactado en su día. Entre tanto, un conflicto silenciado en los medios de comunicación pero de notable dureza está siendo sostenido por los trabajadores de las empresas de Victorino Alonso en Asturias (Tineo, Cerredo y Tormaleo) y León (Laciana y El Bierzo), con piquetes que impiden el tránsito de camiones y actos de sabotaje contra instalaciones y bienes privados del empresario y algunos directivos, mientras la práctica totalidad de los trabajadores se ven abocados al desempleo sin más perspectiva que la emigración y sin ninguna de las coberturas que en el pasado se ofrecieron a otros mineros excedentes bajo la forma de indemnizaciones y prejubilaciones.

A estas alturas, respecto a la situación previa a la huelga, el volumen de empleo ha sufrido ya una drástica reducción desde los más de 7.000 trabajadores ocupados por las empresas matrices y las subcontratas (que representan más del 25% en Asturias y superan el 50% en León) en la minería del carbón en fechas previas a la huelga: 1.783 en la empresa pública y 5.447 en las privadas, distribuidos territorialmente entre Asturias (4.000), León y Palencia (2.150), Aragón (680) y Ciudad Real (300). El declive del sector, que ya ha provocado una sangría económica y demográfica en los últimos años, se acelera ahora de forma dramática. En la localidad de Cerredo, cuya explotación

da empleo a mineros asturianos y leoneses, la población ha caído en los últimos veinte años de dos millares a 839 y buena parte del comercio ha cerrado sus puertas. De 492 empleos existentes, 337 son mineros. El yacimiento, ahora abocado al cierre, era uno de los pocos que parecían tener capacidad de supervivencia más allá del fin de las subvenciones en 2018, tras ser objeto de inversiones por importe de 40 millones de euros hace tan sólo tres años, lo que fue presentado como garantía de completa mecanización, horizonte de 30 años de actividad y previsiones de plantilla de 700 puestos de trabajo.

Un conflicto crepuscular

El carbón español ha subsistido a lo largo de dos siglos gracias a la protección estatal. Bajo una u otra fórmula -aranceles a la importación de fósiles extranjeros, nacionalización de una parte de las minas, subvenciones directas a la producción, cupos obligatorios de consumo u otras ayudas indirectas...- no ha habido tiempo en el que el sector se haya desenvuelto bajo las puras reglas del mercado, si exceptuamos, acaso, la excepcional coyuntura de la Primera Guerra Mundial. La dependencia de decisiones políticas ha constituido siempre el marco natural de su desenvolvimiento y, para los mineros, el único concepto de rentabilidad entendible es el que hace referencia a la rentabilidad social. En un medio en el cual las relaciones laborales han sido tradicionalmente muy conflictivas y el movimiento obrero ha encontrado uno de sus bastiones más sólidos, esta circunstancia ha hecho que, en las situaciones en las que la supervivencia de las explotaciones se ha visto amenazada, se hayan producido coaliciones de facto entre sindicatos y patronal en torno a objetivos comunes que pasan por ejercer presiones sobre los gobiernos de turno. Al mismo tiempo, la acusada identidad sociolaboral de los trabajadores, la fortaleza de la implantación sindical y la gran incidencia de la actividad minera en el tejido socioeconómico circundante han conferido a las huelgas mineras una singular intensidad. Un habitus específico se ha instalado en sus formas de respuesta colectiva y ha perdurado desde los primeros grandes conflictos protagonizados en las postrimerías del siglo XIX (Riotinto, La Unión, Vizcaya...) hasta 2012, cuando ha tenido lugar el que muy probablemente haya sido su canto del cisne. Más allá de cálculos tácticos y diseños estratégicos, la huelga indefinida, la

contundencia de las movilizaciones y el discurso político han formado parte del repertorio de acción colectiva de los mineros siempre que se han sentido agredidos en sus derechos o han visto amenazados su futuro o su modo de vida.

Aunque protagonizada por una generación de mineros que apenas había vivido conflictos similares (el régimen especial que acorta su vida laboral en función de la penosidad del trabajo y las pre-jubilaciones con las que se han resuelto anteriores reconversiones rebajan considerablemente la media de edad de los trabajadores en activo), la huelga de 2012 responde en sus rasgos fundamentales a un patrón largamente repetido que apenas precisaba de explicaciones para quienes lo han asumido como su forma natural de respuesta. En el contexto sindical y político general en que se han producido los hechos, la huelga de los mineros ha acentuado su carácter arquetípico de las viejas formas de lucha obrera y ha alcanzado por ello no pocas descalificaciones argumentadas sobre la base de su anacronismo pero también muchos más apoyos cifrados precisamente en su genuina autenticidad.

En los propios mineros, una acusada conciencia del impacto social de su actividad sobre el entorno y una extendida noción de formar parte de una cadena que los conecta con el pasado y el futuro como depositarios y transmisores de un determinado legado siguen siendo operativos incluso en circunstancias particularmente adversas. Por una parte, juega en contra su reducido número tras sucesivas contracciones de la actividad extractiva, mermando su peso y su fuerza, y, por otra, el contexto general de recortes que afectan a la inmensa mayoría de la sociedad y que a menudo atentan contra servicios o derechos esenciales, haciendo muy improbable un retroceso en las posiciones del Gobierno que pudiera ser interpretado como un gesto de debilidad y sentara precedente para otros colectivos que se venían movilizand.

Cabría añadir a estos factores que debilitaban la capacidad de los mineros para imponer sus problemas como parte de la agenda de prioridades, la acusada sensación de derrota que ha dejado la inexorable contracción del sector en los últimos veinte años. Así lo expresaban, en las postrimerías del siglo pasado, los rockeros asturianos de una legendaria banda de la cuenca del Nalón, los

Stukas: “El futuro ya se agotó / ya no luchas / te sientes perdedor. / Dicen que estás en extinción / que una especie como la tuya / no va a conseguir / cambiar el mundo. / Dicen que pronto acabarán / esos esfuerzos inútiles / que son la razón / de tu existencia”.

Más aún, en su propio entorno, la imagen de los mineros viene padeciendo un desgaste derivado de un sentido de la solidaridad intergeneracional que hace responsables a quienes en el pasado han aceptado condiciones de pre-jubilación muy ventajosas de haber sacrificado el futuro de los jóvenes al no haber logrado al mismo tiempo defender el volumen de empleo o garantizar alternativas sustitutorias del carbón. Un nivel de exigencia que no rige para ningún otro sector laboral que haya sido sometido a reconversiones y que únicamente resulta explicable en virtud del elevado listón que fijan las luchas pasadas y la épica que las rodea, pero que en la práctica ha dado lugar a un extendido sentimiento de frustración expresado no pocas veces en términos de agravio comparativo por parte de quienes no han gozado de las coberturas sociales conquistadas por los mineros. De manera llamativa, una vez desatado el conflicto, en las cuencas asturianas han aparecido pintadas que exigían a los pre-jubilados sumarse a la lucha y, en tanto no lo estaban haciendo, ponían en tela de juicio su hombría y su condición de mineros.

A la erosión de la imagen social de los mineros se añade el deterioro sufrido por sus organizaciones, cuestionadas por los acuerdos suscritos en el pasado, mermadas en cuanto a su base afiliativa y administradoras, sin embargo, de importantes recursos e influencias, al menos en el caso de las cuencas centrales asturianas. Su cuestionamiento obedece al fracaso sin paliativos de las políticas de reactivación económica de las cuencas y el poder adquirido en paralelo por los sindicatos mineros en la gestión de fondos cuantiosos que en buena medida se han revelado estériles pero les han otorgado un gran peso político, social y económico en un medio en declive donde las alternativas brillan por su ausencia y las oportunidades se incrementan cuando se goza del favor de las direcciones sindicales. Éstas se han vuelto, al mismo tiempo, cada vez más recelosas respecto a un entorno que perciben como de hostilidad generalizada y más burocráticas en su funcionamiento interno, donde las tendencias declinantes han perpetuado e incluso acentuado vicios

antidemocráticos. Así ha resultado posible el hecho sin precedentes de que esta última huelga haya reducido a la mínima expresión el papel de las asambleas. El afán de control de las direcciones sindicales y sus mal disimuladas desavenencias han logrado erradicar las asambleas generales de trabajadores a lo largo de todo el curso de la huelga. Únicamente, en los momentos culminantes, ha habido asambleas de afiliados, celebradas por separado y con carácter puramente informativo. De este modo, se ha privado a los no afiliados o a aquellos que militaban en sindicatos minoritarios de cualquier posibilidad de intervenir en las asambleas, se ha hurtado a las bases incluso el debate entre las direcciones de las centrales mayoritarias y se ha impedido cualquier votación que pudiera refrendar o rechazar las decisiones adoptadas desde arriba y muy escasamente explicadas.

Más aun, en el caso de Asturias las relaciones entre las dos centrales mayoritarias han sido casi inexistentes durante la huelga. La incomunicación y el recelo mutuo han presidido la toma de decisiones, las estrategias, los lemas y hasta las imágenes usadas en la propaganda. Mientras el SOMA-FITAG-UGT promovía los encierros en los pozos y convocaba concentraciones de apoyo en el exterior tres días por semana, CCOO, que no toma parte en los encierros por haber sido decididos unilateralmente, iniciaba una acampada en Oviedo y congregaba a tres millares de manifestantes delante del Ayuntamiento de Mieres. En las manifestaciones y en la marcha hasta Madrid, las camisetas verdes en apoyo de los encerrados ugetistas contrastan con las negras de CCOO en defensa del carbón y las cuencas. Y la decisión de poner fin a la huelga es adoptada por separado y entre acusaciones mutuas. Este clima repercute, a su vez, sobre las relaciones con otros grupos de apoyo a la huelga, como sucede con el recelo reinante respecto a la plataforma ciudadana de las Mujeres del Carbón, que cobra presencia mediante comunicados, actos de protesta y manifestaciones convocadas de forma autónoma. El control ejercido por las direcciones sindicales sobre las respectivas militancias, que dan muestra de una notable disciplina, resulta más reducido en cuanto se refiere a los piquetes y las confrontaciones con la policía, puesto que estas acciones no son protagonizadas exclusivamente por mineros sino también por jóvenes y por militantes de otras organizaciones minoritarias.

Pese a todos estos factores de debilidad, la pervivencia o la reactivación de resortes que dan cohesión a los mineros, los predisponen a la movilización y les otorgan audiencia y apoyo social se ha hecho patente en el transcurso de la huelga de 2012. Incluso cuando la lucha se centra en un objetivo tan moderado como la exigencia de cumplimiento de acuerdos en vigor que no ofrecen otra perspectiva que la de una extinción gradual, el componente de dignidad y la consciencia de formar parte de una secuencia histórica que entraña un legado siguen vigentes. Dirigiéndose a su hija, la sindicalista minera Concepción Alonso expresaba esta idea en su blog cuando la Marcha Negra acababa de ser recibida en Madrid con un baño de multitudes: “El día de mañana espero poder sentarme junto a Telma, mi nena, que ahora tiene ocho meses, y contarle todo esto que durante veinte días he estado compartiendo con los lectores. Quiero que tome ejemplo, que sepa que en la vida hay que luchar, que levantarse. Que las cosas no vienen dadas, y que cada generación tiene que coger el relevo de la anterior para mantener lo logrado. Esa lucha la estamos viviendo ahora, y tendrá que participar ella también cuando llegue el momento. Quiero que viva las cosas en primera persona, que se implique, que no espere que los demás lo hagan por ella. Yo, en cierto modo, también estoy en esta causa para dejarle a mi hija un mundo mejor, y ella debe hacer lo mismo por los suyos”. En el mismo sentido se expresaba el texto leído en Mieres por una niña al final de una de las marchas convocadas por las Mujeres del Carbón pocos días después del fin de la huelga: “nos han enseñado que nada se consigue sin esfuerzo y sin lucha”.

Las alusiones al pasado han estado presentes de forma continuada en discursos y en declaraciones de los propios mineros a los medios informativos. En especial, la “huelgona” de 1962, cuyo cincuentenario dio lugar a actos conmemorativos, ha operado como referente simbólico. En el mismo escenario donde dio inicio aquella huelga -el pozo Nicolasa- se celebra un acto que emula el manifiesto de intelectuales denunciando las torturas durante la huelga de 1963, presentando un documento de apoyo a las reivindicaciones de los mineros suscrito por 102 firmantes del mundo de la cultura. También la Marcha Negra contaba con varios precedentes, el primero de los cuales ha caído en el olvido (en 1980 los mineros burgaleses de Crimidesa sostuvieron una huelga

de 300 días que dio lugar a una marcha a pie hasta Madrid), pero no así los restantes: en 1992 se produce otra marcha de mineros desde Villablino que encuentra un caluroso recibimiento en Madrid y en 2010 hay una nueva marcha de mineros entre Villablino y León, que no prosigue hacia Madrid por quedar resuelta su reivindicación de cobro de salarios y aprobación del decreto de primas al consumo de carbón nacional. Habría que contar igualmente la denominada Marcha de Hierro, de 500 trabajadores siderúrgicos vascos y asturianos, llevada a cabo en octubre de 1992.

Las solidaridades sectoriales se activan también traspasando fronteras. Las corrientes de simpatía entre mineros de cualquier lugar del mundo siempre han sido patentes y esta ocasión no será diferente. Delegaciones de mineros alemanes, ingleses, chilenos y polacos viajaron a Asturias, de donde también partieron mineros para buscar apoyos a su lucha. En Inglaterra se creó un Comité de Solidaridad con los Mineros Españoles y varios mineros de Durhan viajaron hasta León.

A su vez, las muestras de simpatía tienen de las más diversas procedencias, incluyendo algunas que pueden resultar completamente insólitas en un conflicto laboral: el colectivo de moteros Leopardos del Asfalto, la estrella del fútbol español David Villa -hijo y nieto de mineros, nacido al pie del pozo Candín-, el también internacional Santi Cazorla y varios futbolistas del Sporting de Gijón expresan de forma activa su apoyo acudiendo a las concentraciones que se realizan en los pozos donde permanecen los mineros encerrados.

El recorrido de la marcha hasta Madrid y, sobre todo, el recibimiento otorgado a su llegada y las varias manifestaciones que les acompañan muestran esa corriente de simpatías. Pancartas suscritas por una enorme variedad de sujetos, colectivos, organizaciones y procedencias geográficas, lemas coreados masivamente que expresan identificación con la lucha obrera, expresiones de agradecimiento por el ejemplo dado en cuanto a la forma de responder a los recortes sociales, reacciones que tratan de emular su actitud multiplicando las protestas en las calles... La huelga minera se convierte así en revulsivo para muchas otras expresiones de malestar. El fenómeno puede resultar especialmente llamativo si tenemos en cuenta todas las limitaciones de partida que presentaba la movilización de los mineros y que ya han sido

señaladas: escasos en número, casi irrelevantes para la economía nacional, con una imagen deteriorada, en un clima de frustración, cuestionados incluso en el entorno más inmediato por no haber sido capaces de defender en el pasado la actividad o de garantizar alternativas para la siguiente generación, por el elevado nivel de ingresos de los pre-jubilados y por el papel que desempeñan los sindicatos como poderes fácticos y administradores de recursos. Cabría añadir su patente desconexión con otros movimientos sociales, en especial con los encarnados por los jóvenes en medios urbanos sociológicamente muy alejados. El comunicado emitido, en el momento de arranque de la huelga, por el grupo de Medio Ambiente de la madrileña Acampada de Sol reclamando el cierre de toda la minería del carbón constituye un ejemplo extremo de esta brecha, en apariencia insalvable, respecto al movimiento social con más capacidad de movilización en los últimos tiempos. Por el contrario, la asamblea de indignados de Oviedo reaccionará apoyando a los mineros y haciendo votos porque “los demás sectores en lucha hoy en día (educación, sanidad, transporte, empleados públicos, etc...) sigan sus métodos de lucha y declaren huelgas indefinidas en sus respectivos sectores”.

Sobre esta base -la de la probada capacidad de movilización de los mineros- se fraguarán las simpatías y solidaridades más heterogéneas. Es la contundencia de la lucha de los mineros lo que les convierte en referentes y en catalizadores de energías ajenas. Por sí misma, la práctica logra hacer confluir sensibilidades muy alejadas allí donde las políticas y los discursos fracasan por sí solos. El éxito en la obtención de apoyos sociales y la captación de simpatías en la opinión pública se produce a pesar de la actitud recelosa y endogámica de las direcciones sindicales, lastradas por estrategias defensivas largamente sostenidas, y de las carencias de unos mensajes que se apoyan en viejos argumentos cada vez menos eficaces (valor estratégico del carbón, agravios históricos, impacto territorial). De este modo, cuando, el 23 de febrero de 2013, el movimiento de indignados convoca una nueva jornada de movilizaciones contra las políticas antisociales y el deterioro del sistema político, la manifestación de Oviedo plasma los puentes tendidos en el transcurso del conflicto del año anterior. En esta ocasión, autobuses fletados desde Madrid, León y Aragón, así como de las cuencas mineras asturianas, sumaron

manifestantes agrupados en torno a la defensa de la minería del carbón que se habían constituido en la huelga del verano pasado y que expresamente hicieron constar que su presencia representaba un ejercicio de reciprocidad con el movimiento de los indignados por los apoyos recibidos de éstos durante su conflicto.

También cabe atribuir a su disposición -presente y pasada- a la lucha, más que a ningún otro factor, la atención recibida. Las reminiscencias de una épica obrerista se mantienen operativas como un activo en tanto son invocadas a través de la movilización. Ni el eco ni los apoyos que obtuvieron guardan correspondencia con su número o su peso social en la actualidad sino con lo que representan como arquetipo rodeado de connotaciones simbólicas que se resiste a desaparecer. Los primeros que denotan esto son los propios mineros, que reaccionan de acuerdo con esquemas transmitidos a través de varias generaciones.

En Asturias, el conflicto de la minería se desarrolla en un contexto que no se limita a la coincidencia con la huelga del transporte sino a anuncios de cierres y recortes severos en otros pilares de la industria: dura aplicación de la reforma laboral en la siderurgia (acompañada de un ERE y paralización de un horno alto), anuncios de cierre en Suzuki, Fábrica de Armas de Oviedo y taller de Barros de Duro Felguera. En Avilés y Gijón se producen sendas manifestaciones contra la crisis y el paro durante el tiempo que dura la huelga minera. Ninguno de estos problemas dará lugar, no obstante, a un conflicto de la envergadura del protagonizado por los mineros ni encontrará una resonancia similar.

Tal como apuntaba el ex-presidente asturiano Pedro de Silva en los albores de la huelga, estos mineros de 2012 se nos presentan en solitaria actitud majestuosa de diálogo con su pasado. De ahí extraían referentes e identidades que les proporcionan activos intangibles que siguen siendo operativos, por más anacrónicos que parezcan. El de 2012 es un conflicto crepuscular, protagonizado por un puñado de mineros que pueblan comarcas en declive cuyo aislamiento -no sólo geográfico- únicamente logra ser contrarrestado por su enérgica capacidad para la respuesta colectiva. Esta batalla, que muy probablemente sea la última, ha sido librada en las peores condiciones: en

medio del vendaval de la crisis y los recortes, en situación de aislamiento social y debilidad política, cuando sólo restaban ya unos pocos miles de mineros en toda España. Pero aun así, los mineros no se han resignado a un funeral de tercera en el que aceptar de manera resignada la suerte que otros escriben para ellos, como sucede con tantos otros afectados por los ajustes. Quienes han salido a la calle o se han encerrado en los pozos parecen responder a lo que se espera de ellos: una reacción colectiva y contundente. En cuanto lo han hecho, han obtenido un eco que muestra cómo todavía, hoy como ayer, los mineros se proyectan más allá de sus reivindicaciones concretas y de los confines de unas cuencas en prolongado declive. Como sujeto colectivo, siguen siendo una figura poderosa, un arquetipo que trasciende lo inmediato. En 1962 eran vistos como la vanguardia, ahora como los últimos exponentes de las viejas formas de lucha sindical. Pero, de uno u otro modo, siguen concitando atenciones y sirviendo de referente.